

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 2-5)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 6-9)

ANNA PALLARÈS-SERRANO

*Profesora agregada de Derecho Administrativo / Professora agregada de Dret
Administratiu*

Los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en materia medioambiental realizados entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2010 que van a ser comentados por su relevancia son los relativos a diversas cuestiones que se centran fundamentalmente en el ámbito de la licencia ambiental y de la evaluación ambiental estratégica.

En materia de licencia ambiental, hay una cuestión sobre la que tenemos varios pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se trata de la interrelación entre la licencia ambiental y la legalidad urbanística. Veremos a continuación de manera individualizada cómo se expresa el Tribunal en las diferentes sentencias en las que ha tenido ocasión de manifestarse al respecto. En la STSJ de Cataluña 963/2010, de 17 de diciembre, se resuelve de manera estimativa sobre la apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Tarragona en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo formulado contra los acuerdos adoptados el 21 de mayo y el 13 de julio de 2007 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys. El primero de los acuerdos otorga licencia ambiental “per a l’activitat d’instal·lació per a la valorització de residus de la construcció i demolició no perillosos” y el segundo ratifica el acuerdo anterior. De resultas del fallo se anulan los citados acuerdos, argumentándose, entre otras cuestiones, que la anulación se debe no a consideraciones ambientales, sino a razones urbanísticas desde el momento en que en la materia que se trata en la Sentencia “los aspectos ambiental y urbanístico resultan absolutamente inseparables, hasta el punto que la propia Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Intervención Integral de la Administración Ambiental en Cataluña (LIIA), exige acompañar una certificación de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico expedida por el Ayuntamiento donde se proyecte llevar a cabo la actividad, tanto en el caso de solicitud de autorización ambiental (artículo 14.1.d), como en el de licencia ambiental (27.1.c), e incluso en el llamado régimen de comunicación”. En el supuesto objeto de litigio, los acuerdos se toman sobre la base de un certificado de compatibilidad urbanística informado favorablemente de manera improcedente desde el momento en que la parcela en la que se quiere instalar la actividad no permite integrar servicios urbanísticos generales —consideración que tiene la planta de reciclaje— cuando no tienen cobertura en el POUM.

En la STSJ de Cataluña 770/2010, de 8 de octubre, el Tribunal también considera que, al tratar cuestiones de autorizaciones y licencias ambientales, los aspectos ambiental y urbanístico resultan absolutamente inseparables. Este pronunciamiento se produce como consecuencia de la interposición de un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Barcelona que desestima el recurso formulado contra la desestimación por acto presunto del recurso de reposición formulado contra la resolución dictada el 20 de septiembre de 2006 por el Ayuntamiento de Cabrera de Mar, que deniega el otorgamiento del permiso ambiental solicitado por la parte apelante. En el sentido señalado, el Tribunal desestima el recurso de apelación argumentando que la razón por la que la Administración deniega el otorgamiento de la licencia ambiental solicitada es la clasificación y calificación urbanística del suelo acreditada, a través del informe del arquitecto municipal, como no urbanizable, clave 13, agrícola protegido, que según dispone el artículo 161 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Cabrera de Mar, en la redacción resultante de la modificación aprobada definitivamente el 17 de julio de 2002, solo permite el uso agrícola o actividades industriales de primera transformación de los productos agrícolas, y, por lo tanto, no permite el desarrollo de la actividad para la cual se solicita la licencia ambiental, que es la actividad de exposición, venta y alquiler de caravanas y casas prefabricadas.

Asimismo, en la STSJ de Cataluña 661/2010, de 23 de julio, a raíz de la impugnación de la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto por Juan Romaní Esteve, S. A., contra la resolución del Departamento de Medio Ambiente de 8 de noviembre de 2004, en la que se deniega autorización ambiental para la actividad de fabricación de papel y cartón, y de la petición en la demanda de anular dichas resoluciones y de reconocer haber obtenido la autorización solicitada por silencio administrativo positivo, la Sala de lo Contencioso-administrativo desestima el recurso afirmando, entre otras cuestiones, que tanto el artículo 21.4 de la derogada Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Intervención Integral de la Administración Ambiental, como el reglamento de desarrollo establecen que la autorización otorgada por silencio nunca puede generar facultades contrarias al ordenamiento jurídico. En el mismo sentido se pronuncia la normativa aplicable al caso en materia urbanística al no permitir bajo ningún concepto entender adquiridas por silencio administrativo positivo facultades en contra de sus prescripciones, de las de los planes, proyectos y programas,

y, en su caso, de las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento. Se hace referencia expresa a las disposiciones urbanísticas porque estas no son ajenas a la materia medioambiental que se trata en la Sentencia, “donde los aspectos ambiental y urbanístico resultan absolutamente inseparables”. La Sala también tiene ocasión de manifestarse respecto a la interrelación entre los aspectos ambientales y urbanísticos con ocasión de la pretensión de la parte actora de que la incorporación de medidas correctoras en el recurso de reposición había de servir para subsanar los incumplimientos que habían provocado la denegación de la autorización argumentando al respecto que la parte actora “debió acreditar ya en el proyecto o evaluación inicialmente presentado el cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros exigibles a la actividad, medioambientales y urbanísticos, es decir, que esta se ajustaba en su integridad al ordenamiento jurídico de aplicación, urbanístico y medioambiental, donde precisamente se contempla el carácter reglado de las licencias”.

En la STSJ de Cataluña 556/2010, de 29 de junio, el Tribunal resuelve sobre un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del *conseller* de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya, de 20 de septiembre de 2005, en la que se aprueba definitivamente el texto refundido de la modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès y los ámbitos relacionados de Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat y el Prat de Llobregat. La parte actora pretende, en la interposición del recurso, la anulación de la resolución citada al cuestionar su legalidad fundamentalmente desde la perspectiva de la falta de cumplimiento de la preceptiva evaluación ambiental estratégica y de no cumplir con el trámite de una nueva información pública por la concurrencia de modificaciones sustanciales en los actos de aprobación provisional y definitiva del citado texto refundido. En relación con la evaluación ambiental estratégica, la Sala llega a la conclusión de que se ha vulnerado la preceptiva evaluación ambiental estratégica de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. A este pronunciamiento se llega después de analizar la citada normativa y su régimen transitorio. Por una parte, en la Sentencia se destaca que, a efectos de aplicación de la Directiva, esta establece, en su artículo 13, que es preceptivo para los Estados miembros

poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para transponer la Directiva antes del 21 de julio de 2004, y que si a partir de esta fecha el Estado no ha realizado los deberes pertinentes, la Directiva tiene efecto directo. Por otra parte, en la disposición transitoria primera de la Ley 9/2006, titulada “Planes y programas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley”, se determina que la obligación de someterse a la evaluación ambiental estratégica se aplicará a los planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004, y esta condición se cumple en el supuesto impugnado al existir unos acuerdos de los ayuntamientos del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat y de Cerdanyola del Vallès de 3 de noviembre de 2004, de 24 de noviembre de 2004 y de 15 de noviembre de 2004, respectivamente, que encomendaron a la Dirección General de Urbanismo la formulación y tramitación de la modificación del Plan General Metropolitano en los ámbitos del Centre Direccional y del paseo del Pont de Cerdanyola del Vallès, la calle Amadeu Torner de l’Hospitalet de Llobregat y el barrio de Sant Cosme y el sector Mas Blau II del Prat de Llobregat, y, por último, el Acuerdo de Aprobación Inicial, de 17 de noviembre de 2004.

Els pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria mediambiental realitzats entre el període 01/05/2010 i 31/12/2010, que comentarem perquè són rellevants, són relatius a diverses qüestions que se substancien fonamentalment en l'àmbit de la llicència ambiental i de l'avaluació ambiental estratègica.

Quant a llicència ambiental, hi ha una qüestió sobre la qual tenim diversos pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Es tracta de la interrelació entre llicència ambiental i legalitat urbanística. Vegem de manera individualitzada com s'expressa el Tribunal en les diferents sentències en què ha tingut ocasió de manifestar-se pel que fa a aquesta qüestió. En la STSJ Catalunya 963/2010, de 17 de desembre, es resol de manera estimativa sobre l'apel·lació contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, en la qual es desestima el recurs contenciós administratiu formulat contra els acords adoptats el 21 de maig i el 13 de juliol de 2007 per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. El primer acord atorga llicència ambiental “per a l'activitat d'instal·lació per a la valorització de residus de la construcció i demolició no perillosos”, i el segon ratifica l'acord anterior. De resultes de la decisió s'anul·len els acords esmentats i s'argumenta, entre altres qüestions, que l'anul·lació es deu no a consideracions ambientals sinó a raons urbanístiques des del moment que en la matèria que es tracta en la sentència “*los aspectos ambiental y urbanístico resultan absolutamente inseparables, hasta el punto que la propia Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Intervención Integral de la Administración Ambiental en Cataluña (LIIA), exige acompañar una certificación de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico expedida por el Ayuntamiento donde se proyecte llevar a cabo la actividad, tanto en el caso de solicitud de autorización ambiental (artículo 14.1.d), como en el de licencia ambiental (27.1.c), e incluso en el llamado régimen de comunicación*”. En el suposat objecte de litigi, els acords es prenen basant-se en el certificat de compatibilitat urbanística informat favorablement de manera improcedent, des del moment que la parcel·la en què es vol instal·lar l'activitat no permet integrar serveis urbanístics generals —consideració que té la planta de reciclatge— quan no tenen cobertura en el POUM.

També, en la STSJ Catalunya 770/2010, de 8 d'octubre, el Tribunal es manifesta considerant que en tractar qüestions d'autoritzacions i llicències ambientals, els aspectes ambiental i urbanístic són absolutament inseparables. Aquest pronunciament es

produeix de resultes de la interposició del recurs d'apel·lació contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, que desestima el recurs formulat contra la desestimació per acte presumpte del recurs de reposició formulat contra la resolució dictada el 20 setembre 2006 per l'Ajuntament de Cabrera de Mar, que denega el permís ambiental sol·licitat per la part apel·lant. En aquest sentit, el Tribunal desestima el recurs d'apel·lació argumentant que la raó per la qual l'Administració denega la llicència ambiental sol·licitada és la classificació i qualificació urbanística del sòl acreditada, a través de l'informe de l'arquitecte municipal, com a no urbanitzable, clau 13, agrícola protegit, que segons disposa l'article 161 de les Normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Cabrera de Mar, en la redacció de la modificació aprovada definitivament el 17 de juliol de 2002, només permet ús agrícola o activitats industrials de primera transformació de productes agrícoles; i, per tant, no permet dur a terme l'activitat per la qual es demana llicència ambiental, que és l'activitat d'exposició, venda i lloguer de caravanes i cases prefabricades.

Així mateix, en la STSJ Catalunya 661/2010, de 23 de juliol, arran de la impugnació de la desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició interposat per Juan Romaní Esteve, SA contra la resolució del Departament de Medi Ambient de 8 de novembre de 2004, en la qual es denega l'autorització ambiental per a l'activitat de fabricació de paper i cartró i de la petició en la demanda d'anul·lar aquestes resolucions i de reconèixer el fet d'haver obtingut l'autorització sol·licitada per silenci administratiu positiu, la Sala Contenciosa Administrativa desestima el recurs i afirma, entre altres qüestions, que tant l'article 21.4 de la derogada Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració ambiental com el reglament de desplegament estableixen que l'autorització atorgada per silenci mai no pot generar facultats contràries a l'ordenament jurídic. En aquest sentit, es pronuncia la normativa aplicable al cas en matèria urbanística, ja que no permet en cap cas entendre adquirides per silenci administratiu positiu facultats en contra de les seves prescripcions, de les dels plans, projectes, programes i, si s'escau, de les normes complementàries i subsidiàries de planejament. Es fa referència expressa a les disposicions urbanístiques perquè no són alienes a la matèria mediambiental que es tracta en la sentència "*donde los aspectos ambiental y urbanístico resultan absolutamente inseparables*". La Sala també té oportunitat de manifestar-se respecte a la interrelació entre els aspectes ambientals i urbanístics en ocasió de la pretensió de la part actora que la incorporació de mesures

correctores en el recurs de reposició havia de servir per esmenar els incompliments que havien provocat la denegació de l'autorització, i argumenta sobre aquest aspecte que la part actora “*debió acreditar ya en el proyecto o evaluación inicialmente presentado el cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros exigibles a la actividad, medioambientales y urbanísticos, es decir, que esta se ajustaba en su integridad al ordenamiento jurídico de aplicación, urbanístico y medioambiental, donde precisamente se contempla el carácter reglado de las licencias*”.

En la STSJ Catalunya 556/2010, de 29 de juny, el Tribunal resol sobre el recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 20 de setembre de 2005, en què s'aprova definitivament el text refós de la modificació del Pla General metropolità en l'àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i àmbits que és relacionen, de Cerdanyola del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat. La part actora pretén, en la interposició del recurs, anul·lar la resolució esmentada qüestionant-ne la legalitat fonamentalment des de la perspectiva de la manca de compliment de la preceptiva avaluació ambiental estratègica i de no complir amb el tràmit d'una nova informació pública per la concurrència de modificacions substancials en els actes d'aprovació provisional i definitiva del text refós esmentat. Quant a l'avaluació ambiental estratègica, la Sala arriba a la conclusió que s'ha vulnerat la preceptiva avaluació ambiental estratègica de la Directiva 2001/42/CE del Parlament europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, i de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. A aquest pronunciament s'hi arriba després d'analitzar la normativa esmentada i el règim transitori. D'una banda, en la sentència es destaca que a efectes d'aplicació de la directiva, aquesta estableix, en l'article 13, que és preceptiu per als estats membres posar en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per transposar la directiva abans del 21 de juliol de 2004, i que si a partir d'aquesta data l'Estat no ha fet els deures pertinents, la Directiva té efecte directe. D'altra banda, en la disposició transitòria primera de la Llei 9/2006, rubricada “*Planes y programas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley*”, es determina que l'obligació de sotmetre's a l'avaluació ambiental estratègica s'aplica als plans i programes el primer acte preparatori formal dels quals sigui posterior al 21 de juliol de 2004, i aquesta

realitat es produeix en el supòsit impugnat, ja que existeixen els acords dels ajuntaments del Prat de Llobregat, de l'Hospitalet de Llobregat i de Cerdanyola del Vallès de 3 de novembre de 2004, de 24 de novembre de 2004 i de 15 de novembre de 2004, que van encomanar a la Direcció General d'Urbanisme la formulació i tramitació de la modificació del Pla General Metropolità en els àmbits del Centre Direccional i del passeig del Pont de Cerdanyola del Vallès, al carrer d'Amadeu Torner de l'Hospitalet de Llobregat i el barri de Sant Cosme i el sector Mas Blau II del Prat del Llobregat i, finalment, l'Acord d'Aprovació Inicial de 17 novembre de 2004.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

(Crònica-Jurisprudència Catalunya-abril 2011)
/Title
(
/Subject
(D:20110507083151)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20110507083151)
/CreationDate
(
/Author
-mark-